



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: CECILIA ALVARADO HENAO
Demandados: ACP COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. Y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 015 2022 00034 01
Sentencia: S-130

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 19 de septiembre de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

CECILIA ALVARADO HENAO demandó a COLFONDOS S.A., PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con

Solidaridad, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los valores que hubiese recibido por motivo de la afiliación, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas de las aseguradoras, con todos sus frutos, rendimientos financieros, intereses y gastos de administración. Pretende además se condene en costas a las demandadas.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que se trasladó al RAIS el 1º de agosto de 2000; que la AFP PROTECCIÓN S.A. omitió la obligación del buen consejo, al no brindarle una información clara y completa de los beneficios, contras y/o consecuencias del traslado; que el 21 de enero de 2022 solicitó ante PROTECCIÓN y COLPENSIONES su retorno al RPM, recibiendo respuesta negativa por parte de COLPENSIONES.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de traslado a PROTECCIÓN S.A. y la solicitud de retorno a COLPENSIONES presentada por la demandante el 21 de enero de 2022, sobre lo demás hechos indica que no le constan por tratarse de situaciones en las que no tuvo injerencia alguna, indica además que la demandante estuvo afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por más de 21 años, tiempo que permite inferir que ha tenido oportunidades suficientes para informarse sobre las condiciones y diferencias de cada régimen pensional, así como los requisitos que debía acreditar en uno o en otro para acceder a la futura prestación por vejez. Se opuso a las pretensiones de la demanda, pues el traslado se dio de manera libre, voluntaria y sin presiones, pues no se evidencian pruebas de un vicio en el consentimiento o de la indebida información brindada por la AFP del Régimen de ahorro individual con

solidaridad. Como excepciones propuso falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación de aceptar la vinculación al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones – artículo 48 de la constitución política, prescripción, compensación, buena fe, imposibilidad de condena en costas y declaratoria de otras excepciones.

PROTECCIÓN S.A. acepta la solicitud de traslado a COLPENSIONES presentada por la demandante el día 21 de enero de 2022, sobre los demás hechos señala que la actora realizó su traslado de régimen pensional de forma libre y voluntaria en fecha 9 de abril de 1997, y que fue libre de todo error en forma consciente e informada, y que este fondo al momento de la solicitud de la actora brindó una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS. Se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto el traslado fue un acto válido y exento de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo. Como excepciones propuso falta de integración del Litis consorcio necesario por pasiva, inexistencia de la Obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y seguros previsionales cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

Por su parte, COLFONDOS S.A. india que los hechos de la demanda no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento, situación que hace imposible una respuesta. Se opuso a las pretensiones de la demanda, ya que no existen presupuestos de hecho ni de derecho para acceder a las mismas, resaltado que la demandante se encuentra válidamente vinculada al RAIS. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de

legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por COLFONDOS S.A., prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado, compensación y pago.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 19 de septiembre de 2022, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, i) **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación de la demandante realizada en las AFP COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.; ii) **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A., a trasladar a COLPENSIONES las sumas que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la actora, esto es, las respectivas cotizaciones, rendimientos, y cuotas de administración, sin incluir otros conceptos que no fueron solicitados en la demanda; iii) **CONDENÓ** a COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES, los gastos de administración que le fueron descontados a la demandante durante el período en que permaneció afiliada a dicho fondo; iv) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a recibir las anteriores sumas, reactivar la afiliación al RPMPD sin solución de continuidad; y v) **CONDENÓ** en costas a COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de COLPENSIONES presentó recurso de apelación de forma parcial, solicitando se modifique la orden dada por el juez, para que las AFP codemandadas devuelvan todos y cada uno de los valores adquiridos por la afiliación de la demandante, lo anterior con base en el inciso segundo del artículo 20 de la ley 100 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, pues de no hacerlo se estaría

generando un enriquecimiento sin justa causa a favor de las administradoras.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término del traslado concedido a las partes, el apoderado de la parte **demandante** presentó alegatos de conclusión a través de los cuales solicita que, en el evento de confirmar la sentencia de primera instancia, esta sea adicionada en el sentido de condenar en costas y agencias en derecho en esta instancia a los apelantes, en razón del desgaste desmesurado del aparato judicial por parte de los demandados, afectando así los principios de celeridad, economía y eficacia procesal, los cuales buscan garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia, sin dilaciones y demoras injustificadas, cumpliendo así, los objetivos que en materia de justicia impone la Carta Magna de 1991.

COLPENSIONES por su parte, solicita se modifique parcialmente la sentencia de primera instancia y en su lugar, se ordene a la AFP PROTECCION S.A. y COLFONDOS S.A., reintegrar la totalidad de aportes realizados por la demandante hacia COLPENSIONES, sin realizar descuento alguno y teniendo en cuenta los valores destinados a gastos de administración indexados, primas previsionales para los riesgos de invalidez y muerte, y los porcentajes destinados a construir el fondo de garantía de pensión mínima.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de la primera conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** CECILIA ALVARADO HENAO nació el 17 de septiembre de 1966¹; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 22 de febrero de 1989; **iii)** el 09 de abril de 1997² suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A., **iv)** posteriormente se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A el 27 de mayo de 1998, **v)** finalmente, regresó a la AFP PROTECCIÓN S.A. el día 06 de junio del año 2000³, entidad en la que se encuentra actualmente vinculada.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

¹ Folio 9 de la demanda

² Folio 33 de la contestación de Protección S.A.

³ Folio 34 de la contestación de Protección S.A.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁴, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271, estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una

⁴ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero”

afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. Nº 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se

hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;

- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, al encontrarse laborando al servicio de Calcetines Cristal hicieron una reunión en donde manifestaron que el Seguro Social se iba a acabar, y que se debían pasar al fondo privado porque saldrían más jóvenes mejor pensionados, y decidió trasladarse; que no le explicaron como era salir mejor pensionados, como tampoco le hablaron de los intereses o rendimientos; que la empresa donde laboró en ese

momento fue la que la trasladó a COLFONDOS, pero nunca tuvo una asesoría por parte de alguien de esta entidad; y que su regreso a PROTECCIÓN S.A. fue debido a que entregó los papeles en donde comenzó nuevamente a laborar.

De lo antepuesto no se deriva –entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador"*.

Debe señalarse además que no se está afectando la sostenibilidad financiera del sistema, principio que está establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso de la demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual, junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

De igual forma, debe advertirse que los traslados realizados por la actora no demuestran la intención de permanecer en ese régimen. Y no lo es porque al respecto también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *"... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad"*.

Tampoco puede analizarse el caso con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 del 1993, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *"... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999"*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar.

De otro lado, en cuanto a la decisión del a quo de ordenar el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros y cuotas de administración, pero sin incluir lo relacionado con los seguros previsionales, porcentaje de garantía de pensión mínima u otros conceptos, tema que se revisará según el recurso de apelación planteado por COLPENSIONES, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a las AFP correspondientes, que procedan con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que*

este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

En consecuencia, la decisión deberá ser **MODIFICADA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A., que procedan con el traslado de todos los conceptos recibidos durante el tiempo que la señora CECILIA ALVARADO HEANO estuvo vinculada a cada entidad, incluyendo, como debe ser, las cuotas y/o gastos de administración, sumas adicionales de las aseguradoras y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima.

Debe señalarse, que no es procedente la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

También es importante manifestar que no resulta procedente la declaratoria de prescripción, toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de las respectivas AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 19 de septiembre de 2022, pero la **ADICIONA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. y

COLFONDOS S.A. que proceda a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-, no solo las cuotas de administración, sino también el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima y los porcentajes de primas de seguros y reaseguros, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora CECILIA ALVARADO HENAO estuvo vinculada a cada entidad.

Si costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **463efaab63e652ed573c1d119bd60028a8ad9e8be5ac3599fc949ac116123f00**

Documento generado en 11/05/2023 03:09:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>